

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO  
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - ORAL  
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

<b>PROCESO</b>	<b>11001 33 35 029 2023 00031 00</b>
<b>DEMANDANTE</b>	<b>OLGA SANABRIA MOLINA</b>
<b>DEMANDADO</b>	<b>DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b>
<b>MEDIO DE CONTROL</b>	<b>NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO</b>

**OBJETO**

Encontrándose el proceso de la referencia al Despacho para estudio de admisión de demanda, se procede a proveer lo que en derecho corresponde.

**ANTECEDENTES**

La señora **OLGA SANABRIA MOLINA**, identificada con cédula de ciudadanía 23.652.924, actuando por conducto de apoderado judicial promueve demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del **DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL**, solicitando que se acceda, de manera principal, a las siguientes pretensiones:

**“PRIMERA:** Que se declare la **NULIDAD**, del siguiente acto administrativo expedido y notificado por la SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL a través del funcionario Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaria Distrital de Integración Social, en razón de la actuación administrativa iniciada por la solicitud de **extensión de jurisprudencia** para lograr el reconocimiento y pago de prestaciones laborales derivadas de la existencia del contrato

realidad docente con radicado SDQS 2396982022, en la cual se negó la existencia de una relación laboral entre mi representada y la Entidad, así como el pago de las acreencias laborales adeudadas:

- Acto Administrativo con radicado No. S2022104865 del 4 de agosto de 2022 mediante el cual se da **“Respuesta a solicitud de extensión de jurisprudencia** – Radicado 2396982022 del 24 de junio de 2022 de OLGA SANABRIA MOLINA”

**SEGUNDA:** Que se declare que entre OLGA SANABRIA MOLINA y la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL existió una relación de trabajo el 20 de enero de 2014 y el 18 de abril de 2022. (...)”

Negrilla y subrayado fuera del texto original.

Nótese que el acto administrativo respecto del cual se está demandando la nulidad es el que niega a la demandante la aplicación de la figura de **extensión de jurisprudencia**.

## CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta lo anterior, debe advertirse que, frente a la extensión de jurisprudencia, la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, establece lo siguiente:

**“Artículo 102. Extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades.** Las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos.

Para tal efecto el interesado presentará petición ante la autoridad legalmente competente para reconocer el derecho, siempre que la pretensión judicial no haya caducado. Dicha petición contendrá, además de los requisitos generales, los siguientes:

(...)

La autoridad decidirá con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables y teniendo en cuenta la interpretación que de ellas se hizo en la sentencia de unificación invocada, así como los demás elementos jurídicos que regulen el fondo de la petición y el cumplimiento de todos los presupuestos para que ella sea procedente.

Esta decisión se adoptará dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción, y la autoridad podrá negar la petición con fundamento en las siguientes consideraciones:

(...)

Contra el acto que reconoce el derecho no proceden los recursos administrativos correspondientes, sin perjuicio del control jurisdiccional a que hubiere lugar. Si se niega total o parcialmente la petición de extensión de la jurisprudencia o la autoridad guarda silencio sobre ella, no habrá tampoco lugar a recursos administrativos ni a control jurisdiccional respecto de lo negado. En estos casos, el solicitante podrá acudir dentro de los treinta (30) días siguientes ante el Consejo de Estado en los términos del artículo 269 de este Código.

La solicitud de extensión de la jurisprudencia suspende los términos para la presentación de la demanda que procediere ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Los términos para la presentación de la demanda en los casos anteriormente señalados se reanudarán al vencimiento del plazo de treinta (30) días establecidos para acudir ante el Consejo de Estado cuando el interesado decidiera no hacerlo o, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 de este Código".

**“Artículo 269. Procedimiento para la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros.** Si se **niega** la extensión de los efectos de una sentencia de unificación o la autoridad hubiere guardado silencio en los términos del artículo 102 de este código, el interesado, a través de apoderado, podrá **acudir ante el Consejo de Estado** mediante escrito razonado en el que evidencie que se encuentra en similar situación de hecho y de derecho del demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de unificación invocada.

Al escrito deberá acompañar copia de la actuación surtida ante la autoridad competente y manifestar, bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la sola presentación de la solicitud, que no ha acudido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el fin de obtener el reconocimiento del derecho que se pretende.

Si el escrito no cumple los requisitos, se inadmitirá para que se corrija dentro del término de los diez (10) días siguientes. En caso de no hacerlo, se rechazará la solicitud de extensión.

La petición de extensión se rechazará de plano por el ponente cuando:

(...)

De cumplir con los requisitos se admitirá la solicitud y del escrito se dará traslado a la entidad frente a la cual se solicita la extensión y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por el término común de treinta (30) días, para que aporten las pruebas que consideren pertinentes. La entidad convocada y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrán oponerse a la extensión, por las mismas razones a las que se refiere el artículo 102 de este Código.

Vencido el término de traslado referido anteriormente, las partes y el Ministerio Público podrán presentar por escrito sus alegaciones en el término común de diez (10) días, sin necesidad de auto que lo ordene.

Dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del término anterior, se decidirá la petición. Si la solicitud se estima procedente, la Sala ordenará por escrito la extensión de la jurisprudencia y el reconocimiento del derecho a que hubiere lugar. Esta decisión tendrá los mismos efectos del fallo extendido.

Cuando resulte pertinente se convocará a audiencia de alegatos en la cual se adoptará la decisión a que haya lugar. A esta audiencia se podrá ordenar la presencia del funcionario de la entidad que tenga la competencia para decidir el asunto, el cual tendrá la obligación de asistir so pena de incurrir en falta grave.

Si la extensión del fallo implica el reconocimiento de un derecho patrimonial al peticionario, que deba ser liquidado, la liquidación se hará en la misma decisión con base en las pruebas aportadas.

De no existir acervo probatorio suficiente para la liquidación, la decisión se dictará en abstracto, caso en el cual la liquidación se hará, a petición de la parte interesada, mediante el trámite incidental previsto en el artículo 193 de este código para la liquidación de condenas. El peticionario promoverá el incidente mediante escrito presentado dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la decisión que ordene la extensión, ante la autoridad judicial que habría sido competente para conocer del medio de control en relación con el asunto que dio lugar a la extensión de la jurisprudencia.

Contra la decisión que liquide el derecho patrimonial procede el recurso de reposición, exclusivamente por desacuerdo en su monto.

**Negada la solicitud de extensión, el interesado podrá acudir a la autoridad para que resuelva de fondo el asunto, según las reglas generales, si no lo hubiere decidido con anterioridad. En este caso, el pronunciamiento de la autoridad podrá ser susceptible de control judicial por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando este proceda.**

Si ya existiere decisión administrativa de fondo, o si el medio de control procedente no requiere pronunciamiento expreso de la entidad, con la ejecutoria de la providencia que niega la extensión se reanudará el término para demandar, conforme a las reglas establecidas para la presentación de la demanda.

Si el Consejo de Estado encuentra que la solicitud de extensión de jurisprudencia es manifiestamente improcedente condenará en costas al peticionario.

Parágrafo 1. La sola decisión sobre extensión de jurisprudencia no será causal de impedimento o recusación del funcionario judicial.

Parágrafo 2. En ningún caso, se tramitará el mecanismo de extensión de jurisprudencia si la materia o asunto no es de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según las reglas previstas en los artículos 104 y 105 de este código".

#### Negrilla y subrayado del Despacho.

De las anteriores disposiciones se destaca que, cuando se **niega** total o parcialmente la petición de extensión de la jurisprudencia o la autoridad guarda silencio sobre ella, no hay lugar a recursos administrativos **ni a control jurisdiccional respecto de lo negado**; teniendo como opción el solicitante, dentro de los treinta (30) días siguientes a esos eventos, acudir ante el Honorable Consejo de Estado para agotar el procedimiento previsto en el citado artículo 269 de la Ley 1437 de 2011.

#### Del caso en concreto.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que, una vez la señora **OLGA SANABRIA MOLINA** tuvo conocimiento de la negativa del **DISTRITO CAPITAL – SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL** de extender los efectos de la jurisprudencia que invocó en sede administrativa, con miras a obtener la declaratoria del contrato realidad (decisión que la citada entidad plasmó en el acto administrativo aquí demandado) contaba el término de 30 días para acudir ante el Honorable Consejo de Estado para agotar el procedimiento de la figura de extensión de jurisprudencia ya ilustrado, **sin tener la posibilidad de acudir, como lo hizo, a los Jueces Administrativos para hacer valer sus intereses mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.**

Quedando claro entonces, que la parte actora no cumplió con la carga procesal que legalmente le asistía, sino que optó por un camino no contemplado en la ley, es pertinente señalar que para tomar la decisión que corresponde, esta sede judicial , adicionalmente debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Que las normas procesales son de derecho público, y, por lo tanto, de imperativo cumplimiento.
- Que el Honorable Consejo de Estado tiene por sentado que los deberes, obligaciones y cargas procesales no pueden desconocerse so pretexto de la prevalencia del derecho sustancial<sup>1</sup>.
- Que el inciso final del artículo 103 de la Ley 1437 de 2011 preceptúa que, quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, está en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en dicho compendio normativo.
- Que no es posible para esta sede judicial ordenar la remisión del asunto al Honorable Consejo de Estado en los términos del artículo 269 de la Ley 1437 de 2011 teniendo en cuenta que se encuentran vencidos los 30 días que para el efecto establece el artículo 102 ibidem.

Con todo, no queda otra opción para el Despacho que dar aplicación al numeral 3º del artículo 169 de la Ley 1437 de 2011, que impone la obligación de rechazar la demanda y ordenar la devolución de los anexos cuando el asunto no sea susceptible de control judicial.

---

<sup>1</sup> Confróntese, por ejemplo, la sentencia de la Sección Primera. Radicación número: 88001-23-33-000-2015-00027-01 (AC). C. P. María Claudia Rojas L.



En mérito de lo expuesto, este Despacho

**RESUELVE:**

**PRIMERO.** Rechazar la presente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la señora **OLGA SANABRIA MOLINA**, identificada con cédula de ciudadanía 23.652.924, en contra del **DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL**, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

**SEGUNDO.** Devuélvanse los anexos de la demanda.

**TERCERO.** Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



**ENRIQUE ARCOS ALVEAR**  
**JUEZ**

MV

PARTE	CORREOS ELECTRÓNICOS
DEMANDANTE	<a href="mailto:Carlos.guevarasin@tiglegal.com">Carlos.guevarasin@tiglegal.com</a> <a href="mailto:Jorge.lucas@tiglegal.com">Jorge.lucas@tiglegal.com</a>